



**SUPREMA CORTE**  
DE JUSTICIA DE LA NACIÓN



# Reseñas

## ARGUMENTATIVAS

RESEÑA DEL AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 2618/2013

PRIMERA SALA DE LA SUPREMA CORTE  
DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

**TRATO DISCRIMINATORIO CONTRA UN  
PROGENITOR CUANDO SE LE NIEGA  
INJUSTIFICADAMENTE LA GUARDA Y  
CUSTODIA DE SUS MENORES HIJOS CON  
BASE EN SUS CONDICIONES DE SALUD**



## **RESEÑA DEL AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 2618/2013**

**MINISTRO PONENTE: ARTURO ZALDÍVAR LELO DE LARREA  
SECRETARIOS: ANA MARÍA IBARRA OLGUÍN Y  
ARTURO BÁRCENA ZUBIETA**

### **PRIMERA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN**

#### **TRATO DISCRIMINATORIO CONTRA UN PROGENITOR CUANDO SE LE NIEGA INJUSTIFICADAMENTE LA GUARDA Y CUSTODIA DE SUS MENORES HIJOS CON BASE EN SUS CONDICIONES DE SALUD**

*Cronista: Mtra. Nicole Elizabeth Illand Murga\**

Mediante escrito presentado el 25 de septiembre de 2012, ante la Oficialía de Partes Común de los Juzgados Civiles y Familiares de Ecatepec, Estado de México, una mujer demandó de su esposo la guarda y custodia de sus menores hijas; el pago y aseguramiento de una pensión alimenticia a favor de ella y sus hijas; y, el establecimiento de un régimen de visitas entre las niñas y el demandado.

El padre de las menores contestó la demanda y, a su vez, reconvino la pérdida de la patria potestad, la guarda y custodia provisional de las niñas a su favor y un régimen provisional de convivencias. Posteriormente, demandó la disolución del vínculo matrimonial. Una vez registrado el asunto y contestada la demanda, se acumularon ambos expedientes.

Así, el 15 de enero de 2013, el Juez del conocimiento dictó sentencia definitiva en la que resolvió disolver el vínculo matrimonial; absolvió a la madre de las menores de la pérdida de la patria potestad; concedió la guarda y custodia de las mismas a su progenitor; decretó un régimen de visitas y convivencia a favor de la madre; ordenó al padre de las infantas acudir a terapias psicológicas orientadas a la educación

---

*\* Funcionaria adscrita a la Unidad de Crónicas de la Dirección General de Casas de la Cultura Jurídica.*



sexual y a terapias de alcohólicos anónimos; y, absolvió a este último del pago de una pensión alimenticia a favor de su ex esposa.

Inconformes, ambas partes interpusieron sendos recursos de apelación que resolvió la Tercera Sala Colegiada Civil de Tlalnepantla, con residencia en Ecatepec de Morelos, del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, quien confirmó parte de la sentencia y modificó otra, pues concedió la guarda y custodia a favor de la progenitora; decretó un régimen de visitas y convivencias a favor del padre de las menores; restringió en forma absoluta el contacto de las niñas con el cuñado de la madre (a quién se le imputó haber abusado sexualmente de ellas); decretó una pensión alimenticia a favor de la progenitora así como de sus menores hijas; y ordenó que padres e hijas tomaran terapias psicológicas.

Contra tal sentencia, el padre de las menores promovió juicio de amparo, mismo que le fue concedido el 21 de junio de 2013 por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, para el efecto de que la Sala responsable dejara insubsistente la sentencia reclamada y emitiera otra en la que resolviera que la guarda y custodia de las niñas se asignara al quejoso, pues de acuerdo al interés superior de aquéllas y con base en dictámenes en materia de psicología, éste se encontraba más capacitado para custodiarlas, ya que, entre otras razones, la madre padecía de lupus y artritis, enfermedades que, aunque no se pudo justificar el grado de daños y/o el tratamiento que sigue para su control, implicaban cuidados especiales y ello no garantizaba el apto desarrollo de las infantes e incluso porque a pesar de que la madre asistía a pláticas con neuróticos anónimos, no constaba que actualmente estuviera en tratamiento para su neurosis e incluso dependía de otras personas para cuidar de sus hijas.

También se estimó que, dado que las infantes viven en el domicilio de su padre; que las enfermedades que padece la progenitora le generan un estado emocional que no es el más conveniente para



cuidarlas; que las niñas fueron objeto de tocamientos por familiares de su madre cuando ésta las dejaba a su cuidado; que la familia paterna da apoyo afectivo; y, que de la pericial en trabajo social se advertía que el progenitor era quien tenía mejores condiciones económicas y sociales, el mejor escenario para el desarrollo de las menores era otorgar la guarda y custodia a este último.

En contra de la resolución anterior, la madre tercera perjudicada interpuso recurso de revisión, señalando como agravios, los siguientes:

- Que no se observó lo previsto en los artículos 4° Constitucional y 1, 8, 11, 17, 19 y 24 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, ya que la discriminaron con motivo de su salud al estimarse que por padecer lupus y artritis ello la hacía menos capacitada para custodiar a sus hijas, siendo que en autos no quedó demostrado que sus enfermedades le impidieran hacerlo o bien valerse por sí misma.
- Que fue discriminatorio considerar su situación económica para otorgar la guarda y custodia al progenitor de las menores, máxime que tal valoración careció de justificación objetiva, razonable y legal.
- Que no debió tomarse en cuenta sólo la opinión de las menores para decidir la guarda y custodia de las mismas.
- Finalmente, adujo que debió atenderse lo previsto en el artículo 4.228, fracción II, inciso a) del Código Civil del Estado de México,<sup>1</sup> el cual indica que los menores de diez años deben quedar al cuidado de la madre, salvo que sea perjudicial para los mismos.

<sup>1</sup>Artículo 4.228.- Cuando sólo uno de los que ejercen la patria potestad deba hacerse cargo provisional o definitivamente de la guarda y custodia de un menor, se aplicarán las siguientes disposiciones:

...II. Si no llegan a algún acuerdo, el juez atendiendo a los elementos de prueba que obren en el sumario y con base en el resultado de las pruebas periciales en materia de trabajo social y de psicología familiar que oficiosamente habrán de practicarseles, determinará:

a) Los menores de diez años quedarán al cuidado de la madre, salvo que sea perjudicial para el menor;



El Tribunal Colegiado remitió los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo Presidente, ordenó formar y registrar el expediente bajo el número A.D.R. 2618/2013, admitió el recurso de revisión, turnó el expediente al **señor Ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea** y radicó el asunto en la Primera Sala. El caso se analizó y resolvió en la sesión del 23 de octubre de 2013.

En principio, la Primera Sala analizó lo relativo al interés superior del niño, puntualizando que es deber del juzgador privilegiarlo en toda contienda judicial donde se involucren derechos de menores, como límite y punto de referencia último de la institución de la guarda y custodia, así como de su propia operatividad y eficacia.

Se precisó que el interés superior del niño tiene su fundamento en el artículo 4° constitucional y también en el derecho internacional, pues el artículo 3.1 de la Convención sobre los Derechos del Niño establece que en cualquier medida que tomen las autoridades estatales debe tenerse en cuenta tal interés y los artículos 9, 18, 20, 21, 37 y 40 de tal Convención también lo mencionan expresamente e incluso la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sostenido que es un “punto de referencia para asegurar la efectiva realización de todos los derechos contemplados en ese instrumento, cuya observancia permitirá al sujeto el más amplio desenvolvimiento de sus potencialidades”, y que es un criterio al que “han de ceñirse las acciones del Estado y de la sociedad en lo que respecta a la protección de los niños y a la promoción y preservación de sus derechos”.<sup>2</sup>

Además, se precisó que la Suprema Corte ha enfatizado en diversos precedentes la importancia de tal principio en la interpretación y aplicación de las normas relacionadas con los derechos del niño,<sup>3</sup> y ha señalado que dicho interés superior cumple con varias funciones

<sup>2</sup> *Opinión Consultiva OC-17/2002*, párrafo 59.

<sup>3</sup> Tesis 1a. CXLI/2007, de rubro: “INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO. SU CONCEPTO.”; tesis P. XLV/2008, de rubro: “MENORES DE DIECIOCHO AÑOS. EL ANÁLISIS DE UNA REGULACIÓN RESPECTO DE ELLOS DEBE HACERSE ATENDIENDO AL INTERÉS SUPERIOR Y A LA PRIORIDAD DE LA INFANCIA.”



normativas,<sup>4</sup> esto es, como pauta interpretativa aplicable a las normas y actos que tengan injerencias respecto de los derechos de niñas y niños;<sup>5</sup> y como principio jurídico rector que exige una máxima e integral protección de sus derechos,<sup>6</sup> de tal manera que en los juicios en los que éstos se vean involucrados, el juez debe atender a *lo que es mejor para el niño*.

**Interpretación del artículo del 4.228 del Código Civil del Estado de México de acuerdo al interés superior del niño. La guarda y custodia de los niños menores de 10 años no le corresponde en automático a la madre.**

Enseguida se analizó el argumento de la recurrente en el que manifestó que de acuerdo a lo señalado en el inciso a), fracción II, del artículo 4.228 del Código Civil del Estado de México, las menores debían quedar a su cuidado, pues en tal precepto se dispone que si no se llega a ningún acuerdo respecto a la guarda y custodia, *los menores de diez años quedarán al cuidado de la madre*, salvo que sea perjudicial para el menor.

Al respecto, se hizo notar que ya existía un pronunciamiento de la Primera Sala sobre cómo debía interpretarse tal precepto legal, pues al resolver el diverso amparo directo en revisión 1573/2011,<sup>7</sup> se afirmó que la guarda y custodia no debe otorgarse en automático a la madre, a pesar de la preferencia establecida por el legislador, ya que el cuidado de los hijos es uno de los objetos más comprometidos de la decisión

<sup>4</sup> Tesis 1a. CXXI/2012 (10a.), de rubro: "INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR. SUS ALCANCES Y FUNCIONES NORMATIVAS."

<sup>5</sup> Tesis 1a. CXXIII/2012 (10), de rubro: "INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR. SU FUNCIÓN NORMATIVA COMO PAUTA INTERPRETATIVA PARA SOLUCIONAR CONFLICTOS POR INCOMPATIBILIDAD EN EL EJERCICIO CONJUNTO DE LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS."

<sup>6</sup> Tesis 1a. CXXII/2012 (10ª), de rubro: "INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR. SU FUNCIÓN NORMATIVA COMO PRINCIPIO JURÍDICO PROTECTOR"; y Tesis P. XLV/2008, de rubro: "MENORES DE DIECIOCHO AÑOS. EL ANÁLISIS DE UNA REGULACIÓN RESPECTO DE ELLOS DEBE HACERSE ATENDIENDO AL INTERÉS SUPERIOR Y A LA PRIORIDAD DE LA INFANCIA."

<sup>7</sup> De ese asunto derivaron las tesis 1a. XCVI/2012 (10a.) de rubro: "GUARDA Y CUSTODIA DE LOS MENORES DE EDAD. EL ARTÍCULO 4.228, FRACCIÓN II, INCISO A), DEL CÓDIGO CIVIL DEL ESTADO DE MÉXICO, INTERPRETADO A LA LUZ DEL INTERÉS SUPERIOR DE LOS MENORES Y DEL PRINCIPIO DE IGUALDAD PREVISTOS EN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, ES CONSTITUCIONAL", y 1a. XCVII/2012 (10a.): "GUARDA Y CUSTODIA DE LOS MENORES DE EDAD. LA DECISIÓN JUDICIAL RELATIVA A SU OTORGAMIENTO DEBERÁ ATENDER A AQUEL ESCENARIO QUE RESULTE MÁS BENÉFICO PARA EL MENOR (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 4.228, FRACCIÓN II, INCISO A), DEL CÓDIGO CIVIL DEL ESTADO DE MÉXICO)".



judicial que impone la organización futura de toda familia a partir la ruptura de la convivencia conyugal entre sus progenitores.

Asimismo, se dijo que los jueces no deben limitarse a indagar el menor perjuicio que pudiera causársele al menor, sino que deben valorar las especiales circunstancias que concurren en cada progenitor y determinar cuál es el ambiente más propicio para el infante, debiendo atender para ello los elementos personales, familiares, materiales, sociales y culturales que concurren en la familia, buscando lo mejor para los hijos, para su desarrollo integral, personalidad, formación psíquica y física, sopesando las necesidades de atención, cariño, alimentación, educación, de sosiego y clima de equilibrio para su desarrollo, las pautas de conducta de su entorno y sus progenitores, el ambiente social y familiar que pueden ofrecerles, sus afectos y relaciones con ellos, su edad, entre muchos otros elementos.

#### **Sobre la evaluación de la condición de salud y situación económica de la madre.**

En cuanto al agravio en el que la recurrente planteó que se le discriminó al haberse fundado la pérdida de la guarda y custodia sobre sus hijas, en su condición de salud y situación económica, se destacó que tal planteamiento implicaba evaluar la decisión judicial a la luz de los principios de igualdad e interés superior del niño.

Para ello, la Primera Sala utilizó la metodología empleada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el *Caso Atala Riffo*,<sup>8</sup> de manera tal que procedió a analizar: (i) los alcances del derecho a la igualdad y no discriminación, así como la salud y situación económica como categorías protegidas por la Constitución y tratados internacionales, (ii) si la determinación de guarda y custodia se fundó en la condición de salud y situación económica de la madre y, de ser así, (iii) si dicha diferencia de trato constituyó discriminación, para lo cual debían

---

<sup>8</sup> Caso Atala Riffo y niñas Vs. Chile. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia 24 de febrero de 2012. Serie C No. 254.



evaluarse las razones dadas para justificar tal diferencia de trato en razón del interés superior del niño y las presunciones de riesgo en perjuicio de las niñas.

**i. Alcances del derecho a la igualdad y no discriminación. La salud y situación económica como categorías protegidas.**

Sobre este punto, la Primera Sala señaló que el principio de igualdad se prevé en el artículo 1º constitucional<sup>9</sup> a través de la prohibición de discriminación y como derecho a la igualdad está reconocido en los artículos 1 y 2 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, 2, 3 y 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en el preámbulo y artículo II de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y artículos 1.1 y 24 de la Convención Americana de Derechos Humanos.

Así, tras precisar lo que la Corte Interamericana y la Corte Europea de Derechos Humanos han señalado sobre la noción de igualdad,<sup>10</sup> se destacó lo que la Primera Sala del Alto Tribunal ha establecido al respecto:<sup>11</sup>

- Que la noción de igualdad deriva de la unidad de naturaleza humana y es inseparable de la dignidad de la persona, frente a la cual es incompatible toda situación que, por considerar superior a un determinado grupo, conduzca a tratarlo con privilegio o que, por considerarlo inferior, lo trate con hostilidad o lo discrimine del goce de derechos.

<sup>9</sup> Artículo 1º ...Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.

<sup>10</sup> La Corte Interamericana ha sostenido que "no toda distinción de trato puede considerarse ofensiva, por sí misma, de la dignidad humana" (Opinión Consultiva OC-4/84). Por su parte, la Corte Europea de Derechos Humanos ha sostenido que una distinción es discriminatoria cuando "carece de justificación objetiva y razonable".

<sup>11</sup> Tesis 1a. CXLV/2012 (10a.), de rubro: "IGUALDAD ANTE LA LEY Y NO DISCRIMINACIÓN. SU CONNOTACIÓN JURÍDICA NACIONAL E INTERNACIONAL."



- Que no todo tratamiento jurídico diferente es discriminatorio, porque no toda distinción de trato puede considerarse ofensiva, por sí misma, de la dignidad humana.
- Que la igualdad es un principio derivado de la noción de idéntica dignidad de las personas, la cual prohíbe la discriminación en la distribución de derechos si éstos se confieren distinguiendo situaciones de manera injustificada.

## **ii. La salud y situación económica como categorías protegidas.**

Sobre el tema, la Primera Sala indicó que al resolver el amparo en revisión 581/2012, se afirmó que cuando la asignación de derechos se basa en alguna de las categorías protegidas por el artículo 1° constitucional, esto es, nacionalidad, género, edad, discapacidad, condición social, salud, religión, preferencias sexuales, estado civil, etcétera, existe una sospecha de que la distinción es discriminatoria y por tanto exige una fundamentación rigurosa y de mucho peso, ya que las leyes que las emplean se ven afectadas por una *presunción de inconstitucionalidad*, sin que pase desapercibido que la Constitución no prohíbe el uso de categorías sospechosas, sino su utilización de forma injustificada; de ahí que el escrutinio estricto de las distinciones basadas en tales categorías garantiza que sólo serán constitucionales aquellas que tengan una justificación muy robusta.<sup>12</sup>

Consecuentemente, la Primera Sala señaló que en el caso, la medida a analizar era un potencial caso de discriminación en el que debía determinarse si se negó injustificadamente el derecho de la madre a ejercer la guarda y custodia sobre sus menores hijas con motivo de su salud y condición económica.

<sup>12</sup> Tesis 1a. XCIX/2013 (10a.) de rubro: "IGUALDAD. CUANDO UNA LEY CONTENGA UNA DISTINCIÓN BASADA EN UNA CATEGORÍA SOSPECHOSA, EL JUZGADOR DEBE REALIZAR UN ESCRUTINIO ESTRICTO A LA LUZ DE AQUEL PRINCIPIO."



**iii. La decisión judicial de guarda y custodia estuvo motivada en la salud y en la condición económica de la madre.**

Una vez que la Primera Sala analizó el fallo reclamado,<sup>13</sup> concluyó que las condiciones de salud y situación económica de la madre tuvieron relevancia en el mismo, evidenciándose un nexo o vínculo causal entre tales circunstancias y la decisión judicial, pues aun cuando se ponderaron otros factores que podían justificar otorgar la guarda y custodia al progenitor (como el que las menores viven en el domicilio de éste, que fueron objeto de tocamientos por un tío materno cuando la madre las dejaba bajo su cuidado, que la familia paterna da apoyo afectivo y que las niñas manifestaron sentirse más cómodas en el domicilio paterno), era imposible determinar el peso específico que tuvo cada uno de estos aspectos, ya que todos los elementos personales, familiares, materiales, sociales y culturales que concurren en una familia deben evaluarse integralmente e influyen en la decisión judicial.

**iv. ¿La determinación de guarda y custodia con base en las categorías alegadas constituyó un trato discriminatorio en contra de la madre de las menores?**

Al respecto, se indicó que cuando el juzgador pondera alguna de las categorías protegidas por el artículo 1° constitucional, como la salud o condición social de alguno de los padres, debe analizarse estrictamente si su uso está justificado<sup>14</sup> y en consecuencia, si su evaluación tiende a proteger el interés superior del niño.

En esa tesitura, se determinó que la ponderación de la salud de la madre podía dividirse en dos aspectos: salud física y mental.

<sup>13</sup> Se analizaron los argumentos expuestos por el Tribunal Colegiado, el lenguaje utilizado y el contexto en que se tomó la decisión.

<sup>14</sup> Se precisó que un uso justificado de las categorías protegidas por la Constitución será aquel que evidencie con base en pruebas técnicas o científicas que dichas circunstancias tienen un impacto negativo en el bienestar y desarrollo del niño, de tal manera que la situación de riesgo alegada debe ser probada, y no ser especulativa o imaginaria.



Respecto a la salud física, se dijo que si bien la sentencia pretendía proteger el interés superior de las niñas, lo cierto era que la motivación esgrimida no fue la adecuada para alcanzar dicho fin, pues no se comprobó, con base en evidencia técnica o científica, el grado de afectación de salud de la madre y la manera en que dicha circunstancia la hiciera menos idónea para cuidar a sus menores hijas; de ahí que la decisión constituía un trato discriminatorio, ya que el juzgador no debió negar el ejercicio de un derecho motivando su decisión en una de las categorías protegidas por la Constitución si ello no estaba justificado.

Por lo que hizo a la salud mental de la progenitora, se destacó que el órgano colegiado evaluó diversos dictámenes periciales para determinar que aun cuando ésta podía convivir con sus hijas, lo cierto era que no se encontraba en las mejores condiciones para hacerse cargo de ellas; esto es, a través de evidencia científica se justificó que dicha situación podría comprometer la integridad y debido desarrollo de las infantes, lo cual indudablemente pretendió proteger el interés superior del niño, y al estar probado el riesgo que tal situación originaría en los derechos de los menores, era claro que fue una medida adecuada.

Asimismo, se indicó que la evaluación de la condición social de la madre también estaba justificada y no fue discriminatoria, pues se basó en evidencia probatoria como fue la pericial en materia de trabajo social rendida para conocer el medio económico y social de las partes, sin que se haya privilegiado a quien se encontrara en mejor situación económica, pues lo que se evaluó fue el entorno social, las condiciones de los inmuebles donde habitan, sus actividades profesionales, las redes de apoyo familiar, entre otros factores.

Finalmente, la Primera Sala estimó infundado el agravio de la recurrente en el que planteó que en la resolución combatida no debió tomarse en cuenta sólo la opinión de sus hijas para decidir sobre su guarda y custodia.



Para ello, se sostuvo que el derecho de los niños a participar en los procedimientos que puedan afectar sus derechos está expresamente regulado en el artículo 12 de la Convención sobre los Derechos del Niño e implícitamente recogido en el artículo 4° constitucional, señalándose que la Primera Sala ha sostenido que esa participación de los niños logra el efectivo ejercicio de sus derechos y, a la vez, permite que el juzgador se allegue de todos los elementos necesarios para forjar su convicción respecto de un determinado asunto y si bien los menores tienen derecho a que sus opiniones sean escuchadas, ello no significa que deba privilegiarse su deseo, sino que su opinión debe ponderarse con otros factores para determinar *lo que es mejor para el niño*.<sup>15</sup>

En el caso, se puntualizó que el tribunal colegiado no se basó únicamente en la opinión de las menores, pues si bien tomó en cuenta sus afirmaciones, lo cierto es que las evaluó con otras circunstancias.

Así, la Sala concluyó que aun cuando la sentencia recurrida pretendió proteger el interés superior de las menores, no se probó que la ponderación de la salud física de la madre fuera adecuada para alcanzar dicho fin, ya que la situación de riesgo en que tal condición las colocaba no se basó en pruebas técnicas o científicas y por ende, la decisión constituyó un trato discriminatorio, contrario a lo que sucedió al evaluar las categorías de salud mental y situación económica que sí estuvieron basadas en periciales y otras pruebas.

Se destacó que lo anterior, no significaba que debiera revocarse la decisión del tribunal colegiado en la que se confirió la guarda y custodia de las niñas al padre, pues era posible que el análisis de otros factores, evaluados en conjunto, permitiera reiterar dicha convicción, por lo que se concedió el amparo a la recurrente, para el efecto de que el órgano colegiado emitiera una nueva sentencia en la que no ponderara

<sup>15</sup> El derecho en comento fue reconocido por la Primera Sala al resolver la contradicción de tesis 60/2008-PS. Ver Tesis 1a. XXXIX/2009, de rubro "MENORES DE EDAD. DEBE DARSELES INTERVENCIÓN PARA QUE SE ESCUCHE SU OPINIÓN EN RELACIÓN CON LA CONTROVERSIA DE LOS JUICIOS DE NULIDAD DEL PROCEDIMIENTO DE ADOPCIÓN."

También ver Tesis Aislada 1a. LXXIX/2013 (10a.), de rubro: "DERECHO DE LOS MENORES DE EDAD A PARTICIPAR EN LOS PROCEDIMIENTOS JURISDICCIONALES QUE AFECTEN SU ESFERA JURÍDICA. LINEAMIENTOS PARA SU EJERCICIO."



su situación de salud física o, si lo hacía, se sustentara en pruebas técnicas o científicas que mostraran el grado de afectación y la manera en que ello la hacía menos idónea que el padre para cuidar de sus hijas.

El asunto se aprobó por mayoría de cuatro votos de los **señores Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz** (quien se reservó su derecho a formular voto concurrente), **Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Olga Sánchez Cordero de García Villegas**, en contra del emitido por el **Ministro Presidente Jorge Mario Pardo Rebolledo** quien se reservó su derecho para formular voto particular.